

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

5ª REUNION -- Continuación de la 1ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) --
MARZO 9 DE 1935

Presidencia del señor diputado Alberto Reinaldo Pierri

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavalet

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ABUJACQUE, Carlos Mariano
ACEROLA, Florencio Guberto
ALBANO, Alberto Gustavo
ALCALA, Néstor Ricardo
ALBOLCAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ, EDUARDO, Raúl Ángel
ALVAREZ GARCÍA, Norberto M.
ANTELO, José María
ARANDA, Saturnino Dantí
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
BALESTRA, René Helvacio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BAUER, Carlos Mario
BACHERA, Eliseo
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENZI, María Cristina
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BERMUDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BISCHOP, Enrique Alberto
BONINO, Miguel Ángel
BORDA, Osvaldo
BRAUCH, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREMER, Adalberto Edgardo
BRUNELLI, Naldo Raúl A.
BRUZZO, Omar Obedio
BULLICH, Patricia
CABIRON, Juan Carlos
CAMANO, Eduardo Oscar
CABANA, Mario Ángel
CARCA, Elsa Beatriz
CASARI de ALARCIA, Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José
CORCHUELO BLASCO, José M.
COSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
DADO, Jorge Carlos
DELLA, Roberto Antonio
DEMPHANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DIGNON, Roberto Secundino

DONN, Luisa Cristina
DRESCHE, María Rita
DUMON, José Gabriel
DURASONA y VEDIA, Francisco d.
DURMIG, Mercedes Margarita
ESTABLAZ POERO, Guillermo E.
FABRISIN, Carlos Alberto
FALLER, Jefe Oscar José
FERNANDEZ CHIL, Guillermo
FERNANDEZ MEJIDE, Graciela
FOLLONI, Jorge Oscar
FONES, Carlos Delcio
GALINPE, Pedro Jorge
GALVÁN, Raúl Alfredo
GARCIA MORENO, Miguel Ángel
GAONA, Juan Octavio
GAZA Rodolfo Mauricio
GIMENEZ, Delfor Abel
GIMENEZ, Ramón Francisco
GIOIA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GOMEZ CENTURION, Carlos E.
GONZALEZ, Antonio Erman
GONZALEZ GAVIOLA, Juan H.
GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Euglio
HUMADA, Raúl
IBARRIA, José María
ITURBE, E. del Valle
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAMMERATH, Germán Luis
KESSLER, Ana Raquel
KOTL, Carlos
LAFALLA, Arturo Pedro
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LEGUIZAMON, María Laura
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADE, Luis Enrique
LOPES, Enrique Raúl
MACRADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MAQUEDA, Juan Carlos
MARTINEZ, Silvia Virginia
MARTINEZ GARBINO, Emilio R.
MATHOV, Enrique José
MATZIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín

MENEM, Carlos Omar
MICHELLI, Mateo Aurelio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLINAS, Ricardo Francisco
MULLER, Mabel Hilda
MUNAGURRIA, Marcelo Julio
NACUL, Miguel Camel
NATALE, Alberto Adolfo
NEGRI, Mario Raúl
NIEVA, Alejandro Mario
NIÑO, Jorge
OLIVERA, Enrique José
ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
PARADA, Alberto
PASCEAL, Rafael Manuel
PELÁEZ, Víctor
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PERINASETTI, Horacio F.
PERINI, Giacinda Eulalia
PESCE, Félix
PICCHETTO, Miguel Ángel
PIERRI, Alberto Reinaldo
POLINO, Héctor Teodoro
RÉ, Ricardo Horacio
RODRIGO, Esteban Joaquín
RODRIGUEZ, Jesús
RODRIGUEZ, Mabel E.
RODRIGUEZ SANUDO, Hugo B.
ROGGERO, Humberto Jesús
ROIG, Ángel
ROJO, Rubén Darío
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Humberto Antonio
ROY, Irma
SALINO, María Antonia
SAMPETRO, Danci
SCELZI, Carlos José
SEBASTIANI, Claudio A.
SMITH, Santos
SOBRINO, Margarita María
SOLANAS, Fernando E.
SORIA, Carlos Ernesto
SUCARIA, Nefef
SUIRO, Carlos Adolfo
TENEV, Carlos
TEODOSIU, Jorge Nicolás
TERRAGNO, Rodolfo Héctor
TOGNI de VELY, Adriana
TOLOMOE, Leonor Ester
TOMA, Miguel Ángel
TOTO, Francisco Patricio
TROYANO, Silvia Elena

USANDEZAGA, Horacio Daniel
VALCARLOS, Joan Manuel
VARELA CHD, Eduardo
VENESIA, Gualberto Edgardo
VICCHI, Raúl Horacio
VIGLIONE, Atino Oscar
VITAR, José Alberto
ZICABELLI, Orlando A.
ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON SOLICITUD
DE LICENCIA PENDIENTE
DE APROBACION
DE LA HONORABLE CAMARA:

ALENDE, Oscar Eduardo
AYETZ, Liliana
CERDERA, Rogelio Rafael
D'AMBROSIO, Ángel Mario
KIEHLER, Ernesto Rolando
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MORELLO, Endilio Pedro
MUNOZ, Marcelo Bernardo
ORQUIN, Leopoldo Manuel

AUSENTES, CON AVISO:

ACHEM, Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo
ALBERTI, Juan Carlos
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALVAREZ, Carlos Alberto
ARAGONES de JUÁREZ, Mercedes

AYALA, Susana Beatriz
BARBOTTI, Atilio Ector
BECERRA, Carlos Armando
BENEDETTI, Jorge Enrique
BONOMI, Silvia Mónica
BUSSI, Antonio Domingo
CALLABA, Anibal
CAMPERO, Rodolfo Martín
CASTILLO, Oscar Anibal
CERALLLOS, Walter Alberto
CLOSS, Ramón Alberto
DEL FABRO, Lilian
DI TULLIO, Héctor Horacio
FAYAD, Víctor Manuel
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FRAGOSO, Francisco Ulises
GALLO, Orlando Juan
GAMAY, Nicolás Alfredo
GONZALEZ CABANAS, Tomás W.
GUERRERO, Luis Serafín
HARDY, Anibal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERRERA ARIAS, Manuel H.
IBARRECHE, Julio César
JAUNARENA, José Horacio
KELLY, Elsa Diana Rosa
LECONTE, Ricardo Guillermo
LOPEZ, Alcides Humberto
LYNCH, Carlos Alberto
MACEDO, Horacio Antonio
MANFREDOTTI, Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARCOS, Ricardo Ernesto
MARTINEZ, Esteban

MARTÍNEZ, Manuel Luis
MENECHINI, Javier Reynaldo
MERCADER, Martha Evelyn
MICLETTE, Salomón Antonio
MOLARDO, Elvio Francisco
MONTIEL, Sergio Alberto
MOREAU, Leopoldo Raúl
MURIEL, Néstor Jorge
NEDER, Jorge Humberto
NOVAU, Pedro José
ORGAZ, Carlos Alfredo
PARAJON, José María
PAROLA, José María
PATTERSON, Ricardo Antell
PERALTA, Anibal Pedro
PEREZ, Jorge Telmo
PICCININI, Ana Ida
PINTO, Guillermo
POLO, Luis Nicolás
PRAT, Alfredo Ernesto
RICO, Aldo
RODRÍGUEZ, José
RUBINI, Mirta Elsa
RUÍZ PALACIOS, José David
SAADI, Ramón Eduardo
SÁNCHEZ GALDEANO, Roque
SANTÍN, Eduardo
SARQUIZ, José Alberto
SPINOSA, Augusto Juan
STORANI, Federico
TOPA, Raúl Roque
TRETTEL MEYER, Raúl
VARELA, Néstor Ángel
VÁZQUEZ, Roberto
VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
ZAVALLA, José Luis

— La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1.ª sesión ordinaria (4.ª reunión) de fecha 8 y 9 de marzo de 1995.

SUMARIO

Continúa la consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (65-P.E.-93) y del señor diputado Santín (5.097-D.-93) por los que se modifica el título VI de la ley 23.966, sobre impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico. Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 526.)

—En Buenos Aires, a los nueve días del mes de marzo de 1995, a la hora 13 y 30:

**MODIFICACION DE LA LEY 23.966
(IMPUESTO SOBRE LOS BIENES
PERSONALES NO INCORPORADOS
AL PROCESO ECONOMICO)
(Continuación)**

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.

Prosigue la consideración en general de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, contenidos en el Orden del Día N.º 1.223, en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (expediente 65-P.E.-93) y del señor diputado Santín (expediente 5.097-D.-93), por los que se modifica el título VI de la ley 23.966, so-

bre impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico.¹

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Lamberto. — Señor presidente: estamos tratando el Orden del Día N.º 1.223, que ha tenido un largo debate en este Parlamento, insumiendo muchas horas a la comisión con la presencia de todos los sectores que involucra este gravamen.

Este impuesto tiene una historia; fue pensado, propuesto y aprobado como una iniciativa del Parlamento argentino en un momento de una gran crisis social que vivía nuestro país. Fue un momento de decisiones tributarias muy duras, cuando se votó la ley del impuesto a los activos, que gravaba virtualmente todo el patrimonio existente en la Argentina, porque no había un aparato recaudador, existía una cantidad de impuestos que no se cobraban, era nula la recaudación del impuesto a las ganancias y espectacular la evasión en el IVA.

Cuando se creó el impuesto a los activos, que alcanzaba a activos destinados a la producción, quedaron afuera los bienes no destinados a la producción, es decir, aquellos de uso personal

¹ Véase el texto de los dictámenes en el Diario de Sesiones del 8 y 9 de marzo de 1995, página 489.

como viviendas, automotores y bienes suntuarios como yates, aviones, propiedades en los *countries*.

En ese momento el Parlamento sostenía que si se gravaban los bienes productivos tenían que ser gravados también los de uso personal o no afectados al proceso productivo.

Esta ley que fue presentada por el señor diputado Matzkin y que comúnmente se conoce como ley Matzkin o impuesto a la riqueza, tuvo inicialmente un buen impacto de recaudación, pero se fue diluyendo en el tiempo, a veces por las dificultades de control de un impuesto generalizado, otras veces por maniobras de elusión fiscal. Hubo una primera parte en la que al gravarse todos los bienes, esa evasión se pudo controlar a través del impuesto al capital de las empresas o impuesto a los activos, que era la mayor base de la recaudación.

Cuando se fueron eliminando impuestos distorsivos fue disminuyendo la cantidad de impuestos, quedando virtualmente los grandes, como el impuesto a las ganancias y al valor agregado, que tuvieron una suba espectacular en la recaudación.

Nuestro gobierno tomó la decisión de eliminar el impuesto al impuesto a los activos, primero achicando la tasa y después eliminando el impuesto.

¿Qué pasó desde entonces. La alternativa de tener bienes gravados en cabeza del propietario de una empresa y desgravados a nombre de la sociedad provocó una brutal traslación de bienes de patrimonios privados a patrimonios empresarios. Ya no se compraba el avión particular; se lo compraba para la empresa. Lo mismo pasaba con el auto importado, que no se lo compraba en forma particular sino a nombre de la empresa. Y en realidad no lo usaba la empresa sino que posiblemente lo usara la familia del empresario.

De esto se deducían amortizaciones e intereses y no se pagaban impuestos. Entonces, creo que vale la pena poner coto a esta evasión que hacen los que tienen la posibilidad concreta del asesoramiento legal, los que pueden interpretar las leyes y que además son los que pueden pagar los honorarios.

Los que tienen recursos no alcanzados por tributos y cuya recaudación puede ser destinada a un fin como el de la previsión social, ameritan sin duda que modifiquemos este impuesto. Esto lo hemos pensado durante mucho tiempo. Hubo momentos en los cuales las crisis de determinados sectores hicieron que postergáramos la decisión de impulsar la modificación de este tributo. Recuerdo que en un momento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda estaba-

mos en condiciones de producir dictamen con respecto a este proyecto de ley, pero hubo una profunda crisis del sector agropecuario —tanto en los precios como en las cosechas— que nos hizo demorar la decisión de efectuar esta modificación.

Hoy la Argentina padece una crisis financiera y sabemos que una de las formas de solucionar una crisis de esta naturaleza consiste en defender a rajatabla el equilibrio fiscal, que constituye la única receta conocida y eficiente para aplicar cuando existen problemas en la economía de un país.

Esto es algo similar a lo que acontece con una familia cuando existen problemas económicos. Una familia, cuando tiene problemas como los comentados, racionalmente ordena sus cuentas y adecua sus ingresos a las posibilidades que tiene. O sea que el presupuesto familiar no es diferente al presupuesto del Estado.

El hombre que constituye un grupo familiar sabe perfectamente que puede gastar lo que gana y pedir fiado al almacenero. Pero cuando el almacenero no le fia porque no le tiene confianza o porque tiene una limitación en su crédito, no le queda otra cosa que trabajar más o gastar menos.

En esas emergencias es necesario tomar decisiones importantes y en forma rápida con la convicción política de que son las únicas que hay que aplicar. Sin duda que a veces se trata de decisiones dolorosas, pero son las decisiones dolorosas las que hacen fuertes a los pueblos, las que dan dinamismo para seguir y le dan garantía a la gente en el sentido de que tienen un gobierno que sabe afrontar los problemas, que no especula con momentos electorales ni con costos políticos ni con la ventaja que se puede sacar al postergar una decisión.

Estamos viendo en todo el planeta qué es lo que ocurre con los países que toman decisiones fáciles; estamos viendo qué ocurre con los gobiernos que ceden a las presiones de los grupos concentrados del poder; también estamos viendo que es correcta esta política que estamos aplicando a rajatabla en relación con la convertibilidad, porque ésta se mantiene con equilibrio de las cuentas públicas.

Por ello, hoy estamos tratando la modificación de este tributo sin olvidarnos del concepto de la oportunidad y del momento por el que estamos atravesando en relación con la situación financiera del país. Estamos dando una señal concreta a la sociedad para que sepa que deben aplicarse los tributos donde existe una capacidad contributiva, lo que significa en estos

momentos que tienen que contribuir más quienes tienen más posibilidades. Si durante meses hemos visto a la clase pasiva demandar recursos para aumentar sus magras jubilaciones, que este Parlamento no les puede suministrar, tenemos que hacer el esfuerzo para garantizar que los jubilados podrán cobrar sus haberes. Para ello tenemos que aumentar la recaudación tributaria evitando la elusión fiscal que se ha producido.

Este gravamen, que afecta a una determinada cantidad de bienes, no es suficiente para sostener los objetivos de su creación. Hay que modificarlo y para ello hemos concurrido a este recinto. Se proponen modificaciones que figuran en dos dictámenes aprobados por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los que son bastante parecidos. El dictamen de la mayoría modifica el impuesto a los bienes personales. En cambio, la bancada radical propone un retorno al impuesto al patrimonio neto.

Defendemos el dictamen de mayoría por varias razones. En primer lugar, no creamos un impuesto nuevo. En segundo término, pensamos que, disminuyendo la tasa de este gravamen y ampliando la base imponible para impedir el juego de las transferencias entre sectores, vamos a poder aumentar sustancialmente la recaudación, manteniendo el concepto de tratar de fiscalizar a quienes evaden este tipo de impuestos, que son razonables y se pueden cobrar.

¿Qué está gravado hoy con el impuesto a los bienes personales? Actualmente se debe pagar por la tenencia de una casa, de un automotor, de un yate o de una finca en un country. De todos estos bienes se deduce un mínimo no imponible de aproximadamente 100 mil pesos. Sobre el excedente de este mínimo se aplica una tasa del 1 por ciento. Ello nos está permitiendo recaudar entre 180 a 190 millones de pesos. El nuevo objetivo de recaudación alcanza los 700 millones de pesos.

¿Qué debemos hacer para lograr este objetivo? Resulta necesario incorporar a la base imponible las participaciones en otros bienes, las acciones, los títulos valores, los depósitos a plazo fijo, los depósitos en cajas de ahorro y las participaciones en sociedades de personas y de capital, que son distintas manifestaciones de la riqueza de una persona. Con respecto a la nueva sumatoria, se mantiene el mínimo no imponible, aplicándose sobre el excedente de este mínimo una tasa del medio por ciento. Es decir que se baja la tasa, se amplía la base sobre la cual se calcula el tributo, se incorpora una mayor cantidad de bienes y, sustancialmente, no se al-

tera el espíritu del gravamen. Es decir que no cambiamos la distribución de la recaudación de este impuesto, que permite allegar más recursos al sistema previsional.

Algunos mal intencionados o mal informados dicen que este gravamen es una reedición del impuesto a los activos. Sin embargo, esto está muy lejos del impuesto a los activos. Cuando incorporamos una participación social estamos hablando de capital. Cuando incorporamos el capital de una empresa estamos incorporando el derecho del propietario sobre ese capital. Pero, ¿qué es el capital de una empresa? Es la diferencia entre el activo y el pasivo. Por lo tanto, aquí se deducen las deudas, lo que fue un viejo reclamo de los sectores que pagaban el impuesto a los activos.

Estamos gravando el neto entre el activo y el pasivo empresario. Hay sectores que dicen que no pueden pagar este impuesto por el alto endeudamiento que tienen. Precisamente, si lo tienen no van a pagar el impuesto porque su patrimonio será cero, cercano a cero o menor a 100 mil pesos.

Además, este impuesto tiene la característica de la progresividad porque es un impuesto directo. Este no es un impuesto al consumo, de esos que nos critica la oposición. Durante estos días y por mucho tiempo escuché a la oposición hablar de un sistema tributario regresivo de los impuestos al consumo. ¿Y qué ocurre, señor presidente, cuando queremos incorporar un impuesto progresivo directo con un mínimo no imponible importante? Que los sectores de menores recursos quedan absolutamente afuera del impuesto; pero desde el otro lado nos dicen que apliquemos un impuesto a los combustibles, a los consumos. Esta es una contradicción evidente.

Creo que éste es uno de los impuestos que se pueden explicar al país, porque a cada emergencia contribuyen los que tienen más recursos o aquellos que tienen ampliamente satisfechas las condiciones elementales de vida. Evidentemente, quien posee un patrimonio superior a 100 mil pesos pertenece a un extracto social privilegiado, por lo que puede contribuir. Además, la contribución pretendida no es excesiva ya que se trata de una alícuota baja sobre los excedentes de los 100 mil pesos. El hecho de contar con un patrimonio importante supone que se tienen rentas importantes.

Esta modificación tributaria más la aprobada en el día de ayer por la Comisión de Presupuesto y Hacienda en su dictamen sobre el impuesto a las ganancias van a cerrar el círculo para evitar cargar los impuestos sobre las espaldas de

los más humildes. Creo que estamos haciendo una reforma progresiva adecuada a épocas de estabilidad monetaria, de baja inflación, que va a permitir cobrar los impuestos.

En el debate en particular vamos a proponer un agregado que tiene que ver con la interpretación del articulado a fin de que no quede ninguna duda de que este impuesto se cobra sin doble imposición; es decir que por un patrimonio se paga una sola vez. En este sentido vamos a proponer que se agregue un artículo al final del proyecto. Desde ya adelante que vamos a mantener el texto elaborado por la comisión. A los diputados de mi bloque les hicimos conocer oportunamente los fundamentos.

Con respecto a los diputados de la oposición, llama la atención que no están; me pregunto por qué no vienen. Los diputados de la bancada socialista se llenan la boca a la hora de los discursos hablando de la política social; sin embargo, cuando hay que votar impuestos a los ricos para implementar la política social, estos socialistas de cartón no están en sus bancas.

La oposición nos viene estorsionando desde hace tiempo con sus ausencias, pero al momento de votar impuestos que son parecidos a los que ella misma propone, tampoco se hace presente. Es muy difícil entender el rol de algunos partidos políticos. Pareciera que a la hora de las grandes decisiones son los grandes desertores. Al justicialismo nos toca siempre tomar decisiones difíciles. Cuando hemos podido tomarlas solos, asumimos la responsabilidad; pero para sancionar una ley de esta naturaleza necesitamos la presencia en las bancas, aunque sea para oponerse, de todos los diputados.

Anoche mismo, después de escuchar al señor diputado Polino en incendiarios discursos en defensa de los intereses de los pequeños y medianos empresarios, en defensa de los intereses de los trabajadores y en defensa de tantas otras cosas que él mencionó, me acerqué a su banca y le pregunté: "¿Mañana, va a venir a votar el impuesto a la riqueza?". "¡Cómo no!", me contestó; pero hoy no lo veo. Lo mismo se aplica a los señores diputados Estévez Boero y Molinas. Es muy fácil pronunciar con fundamento discursos a favor de los pobres y no estar presente a la hora de votar medidas que los favorecen.

Creo que no vale la pena seguir argumentando sobre la necesidad de este impuesto. Esperamos tener la oportunidad de discutir a fondo y aprobar en el día de la fecha, con la presencia de las otras bancadas, este proyecto que necesita el país y que reclama una situación

de emergencia que hace imprescindible la acción concertada de la dirigencia política. No desertemos a la hora de tomar las grandes decisiones. Invito a todos los señores diputados a acompañarnos en la sanción de esta iniciativa en la situación particular que vivimos, que requiere del apoyo de todos y que otorga a esta consideración una importancia inusual. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: tenía previsto hablar para fundamentar el proyecto que ha estado explicando muy bien el señor diputado Lambertini.

Todas estas normas de carácter fiscal, toda la tarea que está realizando el Congreso Nacional, enmarca en una crisis que ha motivado la presencia del señor ministro de Economía ayer en el recinto y en la madrugada de hoy. Hemos escuchado que para hacer frente a esta crisis no tuvimos la suficiente capacidad de predicción de lo que podía ocurrir en la economía argentina.

Hemos escuchado críticas acerca de algunos aspectos no previstos en el programa económico que llevamos adelante, uno de los cuales sería la alta volatilidad de los capitales externos que llegaban al país.

En este sentido quiero señalar que me sorprende la desinformación que padecen los habitantes de nuestro país. ¿Cuánto daño se hubiera evitado si hubiésemos podido informar mejor a la gente acerca de la tarea que este Congreso llevó a cabo en previsión de hechos concretos como los que sufre la Argentina derivados de la situación generada en México!

En los más importantes medios de información hoy se señala que estaríamos por aprobar un sistema de garantía de los depósitos de hasta 3.000 pesos, es decir, un sistema de protección de los depósitos de los ahorristas, como si se tratara de una iniciativa que sacáramos de la manga después de haberse producido los hechos por todos conocidos.

Debo señalar que hace más de dos años este Congreso sancionó un proyecto, que luego se transformó en la ley 24.144, que establece en primer lugar que, en el sistema financiero, en la República Argentina todo depósito inferior a 3 mil pesos tiene una garantía prácticamente total de devolución a sus legítimos propietarios, es decir, a los depositantes.

En esa misma norma de protección de los depósitos se establece que quien deposite por un plazo superior a los tres meses — más de 150 días — goza de este tipo de garantías, cualquier-

ra fuere el monto de que se trate. Este es un proyecto sancionado por el Congreso de la Nación y transformado en la ley 24.144, que tiene más de dos años de vigencia.

Hemos recibido —esto es realmente paradójico— felicitaciones del Bundesbank de Alemania y de universidades de los Estados Unidos, manifestando que se trata de un régimen que ha resuelto una de las grandes contradicciones de los sistemas monetarios y financieros porque reúne los requisitos de no comprometer el patrimonio del Estado, no discriminar entre bancos por su calidad o su capacidad en el manejo de los créditos que otorgan, y garantizar integralmente los depósitos sin costos adicionales que se transfieran a las tasas de interés.

El mecanismo adoptado ha sido el de utilizar los encajes que siempre están depositados en el Banco Central de la República Argentina; los mismos encajes a los que refería el ministro Cavallo en la madrugada de hoy y que son los que constituyen la reserva del sistema. Justamente a partir de esa reserva hemos construido este régimen de protección de los depósitos.

Con todo esto quiero significar que este proyecto —transformado en la ley 24.144— firmado por quien habla, por los diputados Lamberto y Matzkin y por otros legisladores justicialistas, que mereció en su oportunidad la aprobación unánime de ambas Cámaras del Parlamento, no ha tenido difusión, lamentablemente, para que los beneficiarios, que son los depositantes, pudieran saber que para situaciones de crisis, como la que estamos viviendo como producto de los hechos generados en México, habíamos previsto soluciones estructurales y profundas que resolvían el problema. Es decir que nos anticipamos a esta idea que ahora se ha materializado respecto de la alta volatilidad que poseen los capitales externos.

Una de las tareas de los gobernantes es mirar más allá de lo que puede ver el común de la gente, y prever. Por ello, cuando analizamos las normas impositivas y estudiamos cómo salir de la crisis en que nos han metido elaboramos normas que tienden a prever los acontecimientos futuros a efectos de que los argentinos sepan que no permitiremos que vuelvan a ocurrir hechos que tanto daño han ocasionado a la Argentina en el pasado. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Picri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Albamonte. — Señor presidente: tal como lo ha descrito el señor diputado Lamberto nos hallamos ante una situación muy particular que

lamentablemente no se ve acompañada por la responsabilidad de algunos representantes del pueblo.

Es justo decir que el panorama que presenta nuestra economía no halla un correlato razonable en la Cámara de Diputados. No podemos entender que haya bancas vacías, porque en más de una oportunidad, tanto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como en este recinto, quienes hoy no están presentes han levantado su voz reclamando lo que ahora pretendemos sancionar en virtud de que el cambio histórico que el país ha emprendido de ninguna manera puede tener retorno. Si alguien piensa equivocada e irresponsablemente que volver al pasado significa una ventaja electoral está cometiendo un error imperdonable, por dos razones.

En primer lugar, porque volver al pasado significaría, sin lugar a dudas, un empobrecimiento y una frustración para nuestro pueblo, porque implicaría perder definitivamente el tren de la historia, porque los cambios se están produciendo en el mundo entero, porque hay una globalización de la que tanto se habla que significa, por ejemplo, que los grandes bloques que operan en Suiza trabajan ahora las 24 horas del día en virtud de que siempre hay un mercado abierto, ya que los capitales vuelan a la velocidad de la luz de un mercado a otro, porque los errores cometidos en un tercer país afectan en forma directa las inversiones globales y las economías de otros países y porque existe una tendencia en los mercados internacionales a meter a todos en la misma bolsa.

Entre todos estamos haciendo un gran esfuerzo para marcar las notables diferencias existentes entre nuestro país y el hermano pueblo de México, que se evidencian no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el político.

Estamos aquí —por ahora, en minoría— con la convicción y la responsabilidad de saber que cada vez que aplicamos una nueva alícuota o creamos un nuevo impuesto debemos medir muy bien nuestras decisiones y ver, en primer lugar, a quién afectamos, es decir no cometer el error de perjudicar a quienes menos tienen y, en segundo término, no correr el riesgo de excedernos en la presión tributaria porque a la postre significará una menor recaudación o el denominado efecto tanzi.

Algunos dicen que aplicar una alícuota al mercado de capitales, al de inversiones o a la Bolsa de Comercio ahondará más la crisis bursátil. Pero recuerdo que cuando existían im-

posiciones sobre las acciones —que eran realmente significativas— la Bolsa de Comercio de Buenos Aires —que es la más importante del país— operaba entre 1 y 2 millones de dólares. Sin embargo, cuando este gobierno cambió las reglas de juego y redujo los costos bursátiles, llegamos a ser una de las bolsas más importantes de Latinoamérica junto con la de San Pablo, Brasil.

Hoy le estamos pidiendo a una importante cantidad de ciudadanos que haga un esfuerzo que ya ha tenido su premio no sólo por la estabilidad sino también por el crecimiento económico que ellos mismos han experimentado, no obstante lo cual —como señalaba ayer el señor diputado Castillo— algunos empresarios adoptan actitudes que no se pueden entender. Se trata de sectores empresariales que en los últimos tiempos se han beneficiado enormemente; inclusive, un diario del día de la fecha hace referencia a las ganancias obtenidas por una importante empresa automotriz que ante la primera nube o posibilidad de que sus ventas se reduzcan la emprende contra sus propios empleados.

El cambio producido en la Argentina no es meramente político o económico, es básicamente cultural.

Recuerdo que cuando hablábamos de la necesidad de respetar el valor de la moneda, de pagar los impuestos, de lograr equanimidad en materia fiscal y tributaria o de la necesidad de contar con estabilidad y luchar frontalmente contra el flagelo de la inflación, muchos —en este mismo recinto— nos decían que si bien tenían razón, seguramente pasarían varias generaciones hasta que cambiáramos de mentalidad. Por suerte ese cambio se logró y hoy existe una nueva mentalidad en la Argentina.

En la actualidad todos somos conscientes de que debemos pagar los impuestos. Inclusive quienes políticamente se ubican en nuestras antípodas —aunque tal vez de manera oportunista— pretenden separar la estabilidad —a la que cuidan muy bien— del modelo económico, como si aquella hubiera surgido por generación espontánea y no fuera consecuencia de medidas concretas y del enorme esfuerzo realizado ya no por los funcionarios sino por todo el pueblo argentino.

Por supuesto, cuando se da este tipo de debates algunos diputados tenemos tendencia a hablar de la macroeconomía y exhibir las tasas de crecimiento extraordinarias que nuestro país ha tenido últimamente, inéditas en toda nuestra historia.

Pero a veces, aun aquellos que conocemos estos números, sentimos un prurito porque tenemos un cierto temor a que estas consideraciones no le lleguen al trabajador, al maestro o al ama de casa. Es decir, como si este crecimiento que ha experimentado el país y que no puede detenerse, de alguna manera fuera para los libros o para las estadísticas, y no para la gente.

Pero a medida que caminamos y hablamos con nuestros ciudadanos nos encontramos con que la gran mayoría de ellos dice que ahora sí pudo comprar lo que nunca antes podía, porque ahora hay crédito.

Estamos frente a un gran desafío. Apoyo decididamente este proyecto y me vuelvo a sorprender de aquellos que ayer, en una actitud digna, democrática y responsable se comprometieron a estar hoy aquí para facilitar la sanción de todos los instrumentos necesarios para salir de la crisis. Esto fue lo que dijo el señor diputado Dumón en la madrugada de hoy. ¿Pero dónde están? ¿Adónde quedaron esas palabras? ¿Es posible que rehuyamos el debate cuando la sociedad toda está mirando a este Parlamento, cuando la sociedad está exigiendo de sus representantes soluciones que tal vez no podamos dar en su totalidad?

Pero lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y dejar que las cosas pasen, porque estaremos perdiendo la última oportunidad histórica. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pepec. — Señor presidente: usted sabe que llevamos muchos años aquí. El espectáculo de ayer, con un recinto partido a la mitad, con todo el sector a mi izquierda ausente, debería llenarnos de vergüenza, aunque particularmente a los hombres de la oposición.

Ayer se trató un estatuto —como el de las Pymes— que fue muy empujado por la oposición. Pero no vinieron. Tuvieron la desfachatez de aparecer en el recinto en cuanto el ministro Cavallo se sentó. Ahí sí entraron para interpelar y hacer discursos demagógicos, en lugar de poner el pecho en momentos en que la sociedad lo requiere.

Estoy realmente sorprendido por esta actitud. El peronismo, en seis años de oposición, jamás procedió de esa forma como ayer sí lo hizo la oposición, especialmente los hombres de la Unión Cívica Radical.

Formulo una exhortación para que los radicales vengan a este recinto, porque a este país se lo construye entre todos. Muchas veces me

tomaron el pelo diciéndome que siempre saco a relucir el ejemplo del abrazo entre Balbín y Perón. Lo hago porque estoy convencido de que eso sirvió para modificar una sociedad que vivía absolutamente dividida y en permanentes contradicciones.

Deseo que los radicales vengan a exponer su posición; ¡no se escondan detrás de las cortinas, vengan a discutir!

Hoy estamos planteando el tema del impuesto a la riqueza, pero, caracho, ni para analizar esa cuestión quieren venir. Se trata de apretar a los que más tienen, que paguen los que más tienen, o mejor dicho, los que más tenemos, porque a nosotros también nos va a tocar una cuota y en ese sentido estaremos dando el ejemplo, de arriba hacia abajo.

¿Acaso creen que se puede especular electoralmente pegándole a una actitud asumida por el justicialismo que se enraiza con las mejores actitudes del peronismo desde sus orígenes?

Se equivocan los radicales y yo los exhorto para que vengan, no sé si habrá alguna forma de lograr que vengan a discutir con nosotros y no aparecer, como ocurrió anoche, cuando se trataba de la visita del señor ministro, quien por otra parte, con toda valentía se bancó cuanto cosa se dijo desde la oposición.

Reitero que estamos tratando el tema del impuesto a la riqueza, es decir, a los que más tienen y deseo que los radicales vengan aquí a ayudarnos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el señor diputado Matzkin tiene alguna información sobre el bloque radical.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: hace unos instantes me comuniqué telefónicamente con el presidente del bloque radical quien me pidió si podíamos aguardarlos unos minutos. Ellos estaban culminando una reunión del bloque, donde según me decía habían cambiado opiniones sobre el régimen que estamos considerando, y agregaba que en principio en algunos minutos más probablemente concurrían al recinto.

Por eso creo que amerita poder aguardar algunos minutos. No sé si la Presidencia tiene anotado a algún señor diputado para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Están anotados los señores diputados Santín, que se encuentra ausente, e Ibarbia, que tampoco está en el recinto.

La Presidencia desea saber si el bloque radical le informó al señor diputado Matzkin sobre la hora en que concurrirán al recinto.

Sr. Matzkin. — No hay hora determinada, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — A los efectos de esperar a los señores diputados del bloque de la Unión Cívica Radical, invito a la Honorable Cámara a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 14 y 17.

—A la hora 15 y 53, bajo la presidencia del señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero:

Sr. Presidente (Romero, C. A.) — Continúa la sesión.

Sr. Galván. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Romero, C. A.) — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: nuestro bloque tiene plena conciencia del momento que estamos viviendo. Nos encontramos en estas bancas continuando la sesión en actitud de absoluta responsabilidad republicana. Si no estuviéramos aquí sentados, tal vez alguien diría, en metáforas ya conocidas, que este bloque se esconde detrás de sus responsabilidades históricas. Por eso venimos a decir con sensatez, firmeza y convicción un par de cosas que se vinculan con el rumbo del tratamiento de esta legislación y de la que pudiera venir.

En primer lugar quiero señalar que el proyecto de ley en consideración requiere, en virtud de las prescripciones de la nueva Constitución Nacional, una mayoría indispensable, una mayoría que está cuantificada en el inciso 3º del artículo 75: la mayoría absoluta. Esto es necesario puntualizarlo porque alguien podrá decir, acuciado por las urgencias económicas y financieras, que hay que saltar el vallado de la Constitución de los argentinos para arrojarlos al vacío de la suerte o al pozo, como lo señalaba ayer el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos. En este sentido debemos destacar que ningún país democrático ha resuelto sus crisis económicas, financieras o políticas fuera del marco de la Constitución Nacional.

Esto no es, entonces, un simple enfrentamiento de cuestiones doctrinarias, por aquello que decía nuestro comprovinciano Joaquín V. González, en el sentido de que la mitad de la biblioteca sostiene una razón y la otra mitad, una razón distinta. Aquí se trata de marcar las responsabilidades de gobierno, del cual formamos parte, y en esto encuentro la única coincidencia, tal vez, con el señor ministro de Economía. Pero si llegáramos a cometer el error de permitir que se sancione una ley al margen de la Constitución, de modo tal de quedar habilitada la Corte Suprema de Justicia para arbitrar sobre su legi-

timidad, dejaríamos abierta una amplia franja de discrecionalidad, con el riesgo que implica que en la última instancia sea una Corte de cuya imparcialidad dudamos la que dirima la constitucionalidad de los actos de esta Honorable Cámara de Diputados.

Entonces voy diciendo con toda claridad que este bloque solamente votará las leyes de esta naturaleza en cuanto cuenten con 130 votos afirmativos, es decir, la mayoría que exigen las nuevas normas de la Constitución.

No podemos eludir otra cuestión, como lo ha señalado con toda certeza esta madrugada la señora diputada Guzmán. Está flotando en el ambiente y, diría, en los periódicos, el propósito del Poder Ejecutivo de insertar un artículo nuevo en estas leyes que en su momento vamos a tratar por el cual lisa y llanamente se concede la suma del poder público al Poder Ejecutivo, en cuanto contempla una delegación de facultades que permitiría al ministro de Economía gravar el esfuerzo de los argentinos hasta en un 25 por ciento en la alícuota de los impuestos que deben pagar los hombres y mujeres de la República de los argentinos.

Comprenderá el señor presidente que nuestra bancada no podrá jamás colocarse bajo la sombra del anatema del artículo 29 de la Constitución, que califica de traidores a la patria a aquellos legisladores que confieran al Poder Ejecutivo la suma del poder público de forma que la hacienda, la honra o el destino de los argentinos estén en manos de un funcionario, sea el presidente o el ministro de Economía.

También debo decir con toda honradez —como lo ha señalado anoche el señor diputado Dumón—, que no estamos para poner palos en la rueda, como se suele afirmar. Estamos en la contribución honrada. Nosotros no experimentamos esas sensaciones deletéreas de la alegría pasajera que experimentaron los actuales funcionarios en el 89 cuando provocaron la caída del gobierno de la Unión Cívica Radical, porque para los radicales la Nación es más importante que nuestro partido. Estamos dispuestos a la contribución honrada y no queremos sacar un solo centímetro de ventaja electoral en esta cuestión que no puede quedar subordinada a propósitos personalistas ni a egoísmos partidistas.

Estamos aquí para decir al país que la Unión Cívica Radical va a contribuir con su presencia republicana en este foro de la democracia argentina, pero dentro de los límites de la Constitución que un día juramos en ese mismo hemisiciclo en el que anoche estuvo el señor mi-

nistro de Economía informando con tambores de una melancolía y un dramatismo tremendos sobre cuál es el estado actual de la República de todos los argentinos.

Por esa razón no vamos a consentir que esta iniciativa se aparte del inciso 3 del artículo 73 de la Carta Magna jurada hace poco tiempo en el Palacio San José, Entre Ríos, de la misma manera que no vamos a conferir la suma del poder público para que esta conducción económica, que ha venido a dar la lamentable radiografía de la decadencia argentina, siga conduciendo al esfuerzo nacional rumbo al pozo ciego del desconcierto y la desesperanza.

Dicho esto, no vamos a fomentar ficciones. El oficialismo no tiene número y no vamos a contribuir a conformar el quórum. Si lo hiciéramos, caeríamos en la ficción de 130 señores diputados que de ninguna manera van a satisfacer las exigencias de la Constitución Nacional.

Es así que nos vamos a retirar con decoro, aunque estamos dispuestos a esperar las réplicas, porque nuestra intención no es la de eludir el debate. Vamos a discutir, señor presidente, pero vamos a aclarar cuál es la responsabilidad de este gobierno que, dicho sea de paso, se ha ocupado permanentemente de erosionar a la oposición, tratando de demostrar que sin oposición ellos cuentan con mayorías eternas, olvidando lo que decía Ricardo Balbín acerca de actuar con o sin mayorías que fueron minorías.

En nombre de nuestra responsabilidad, que es modesta pero republicana y decorosa, no vamos a colaborar en la formación del quórum para sancionar leyes que gravan el esfuerzo nacional y no respetan la Constitución de los argentinos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: lejos del tono patético utilizado por el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, con el respeto que me merece y sin pretender adjetivarlo, deba señalar que ha sido un diputado de su propia bancada —el doctor René Balestra— quien ha definido realmente qué es lo patético en estas circunstancias.

Seré parco para responderle y lo haré con la letra y el espíritu de la Constitución, porque según las Sagradas Escrituras, a veces la letra mata y el espíritu vivifica.

Sin querer significar que haya malas interpretaciones del texto constitucional por parte de los hombres de la oposición política pertenecientes a la Unión Cívica Radical, creo que

hay confusión acerca de la letra y el espíritu de la Carta Magna y de qué es lo que quiso hacer y decir el constituyente.

Desde anoche se viene insistiendo en que el proyecto contenido en el Orden del Día número 1.223, que modifica el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico, está comprendido en los alcances del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que establece que una de las facultades del Congreso Nacional es la de establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

El error está precisamente en el encuadramiento legal que efectúa el señor diputado Galván, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.

Si leyera con detenimiento el inciso 2, primera parte, del artículo 75 de la Constitución Nacional, se daría cuenta de que el constituyente ha querido incluir las asignaciones específicas en dos párrafos distintos: en el inciso 3, como asignaciones específicas coparticipables, y en el primer párrafo del inciso 2, como asignaciones específicas no coparticipables.

El artículo 75 de la Constitución Nacional determina: "Corresponde al Congreso... 2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan". Y continúa diciendo la última parte del primer párrafo, que me interesa recalcar: "Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables".

Lo único que determina el contenido del Orden del Día N° 1.223 es una modificación del impuesto sobre los bienes personales para ensanchar la base de los recursos, pero en ningún momento modifica el destino de los fondos, que conforme con la ley 23.966 corresponden a los jubilados, y que yo sepa ésta no es una de las asignaciones específicas de recursos coparticipables que se incluyan en el artículo 75, inciso 3, y que exijan una determinada mayoría.

¿En qué se basó el espíritu del constituyente? En que aquellas asignaciones específicas de recursos coparticipables necesitaban del consenso de las fuerzas políticas y el pronunciamiento

de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara porque alteraban las relaciones entre la Nación y las provincias.

Esta asignación específica que hoy estamos debatiendo es no coparticipable porque no altera las relaciones entre la Nación y las provincias y, por lo tanto, no necesita de ninguna mayoría calificada. He aquí la sutil pero profunda diferencia que existe entre uno y otro hecho. Uno, tipificado en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución, el de las asignaciones específicas coparticipables, que necesitan de una mayoría calificada. He aquí la sutil pero profunda diferencia que existe entre uno y otro hecho. Uno, tipificado en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución, el de las asignaciones específicas coparticipables, que necesitan de una mayoría calificada, y otros, tipificado en la primera parte del inciso 2 del artículo 75, como una excepción, el de las asignaciones específicas no coparticipables, como en este caso, en que se destinan directamente al pago de las jubilaciones y pensiones.

Por eso no podemos aceptar la acusación de que nos queremos apartar de la Constitución Nacional. Somos esclavos de la ley y de aquella. Podemos tener interpretaciones distintas; por ejemplo, en este caso consideramos que vuestra posición está equivocada, aunque no nos sentimos dueños de la verdad absoluta; simplemente pensamos que nuestro razonamiento es el correcto.

De todos modos, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se nos diga que pretendemos avasallar el texto constitucional que suscribimos con nuestra firma y al que juramos defender con nuestra sangre y honor.

El señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical sabe que hemos propuesto agregar un artículo para facultar al Poder Ejecutivo nacional, hasta el 31 de diciembre de 1965, a modificar hasta el 25 por ciento la alícuota de distintos gravámenes vigentes y a eliminar exenciones tributarias. No estamos depositando la suma del poder público en manos del Poder Ejecutivo, como expresó el señor diputado por La Rioja, quien en su exposición también equivocó el número del artículo pertinente, ya que aquel que habla de que quien entregue la suma del poder público será castigado como infame traidor a la patria fue suscrito por los Constituyentes de 1853, quienes estaban imbuidos del momento histórico que les tocaba vivir después de que durante 29 años el país había estado gobernado por Juan Manuel de Rosas.

Hoy la situación es distinta. Estamos bajo un gobierno que ha sido elegido por la voluntad popular y confirmado mediante cuatro elecciones más por ese mismo pueblo. Bajo este gobierno se ha reformado la Constitución, cuyo artículo 76 ha zanjado una cuestión doctrinaria que si bien ya había sido aclarada por la jurisprudencia de la Corte Suprema ahora se encuentra expresamente sancionada en una norma constitucional que autoriza la delegación legislativa al Poder Ejecutivo en determinados casos. El artículo 76 de la Constitución Nacional textualmente señala: "...en materias determinadas de administración o de emergencia pública..."

Sr. Fernández Gili. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Maqueda. — Señor presidente: adelanto que no he de conceder interrupciones por entender que éstas constituyen un método perverso que rompe la ilación de las exposiciones.

Por otra parte, el señor diputado tiene la posibilidad de solicitar la palabra y en el momento que se la concedan rebatir mis argumentos.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Maqueda. — Señor presidente: el texto del artículo 76 de la Constitución Nacional después de prohibir en general las delegaciones legislativas, las autoriza para determinadas materias, por ejemplo, de administración o de emergencia nacional.

Creo que nadie duda, sobre todo después de las palabras pronunciadas en el día de ayer por el señor ministro de Economía y de las exposiciones de los señores diputados Leopoldo Moreau y Federico Storani, que estamos ante una situación de crisis y de emergencia nacional. A nadie se le puede cruzar la peregrina idea de que estamos utilizando un instituto de la Constitución Nacional con un sentido plebeyo, perverso o frugal. Por el contrario, echamos mano de él porque realmente el Poder Ejecutivo necesita herramientas que le permitan conducir esta emergencia nacional, porque —como lo señaló el presidente de mi bloque— hemos asumido la responsabilidad histórica del gobierno, lo cual demandó determinadas herramientas que no están al margen de texto constitucional. Esas herramientas no son la suma del poder público, sino más bien la delegación legislativa circunscrita al texto constitucional, por razones de

emergencia y por un plazo que va hasta el 31 de diciembre de este año. Además, se lo hace dentro de los marcos que la Constitución Nacional le fija al Congreso de la Nación. Estas son las tres condiciones que establece este artículo.

Pero más allá de esto y de estas apreciaciones jurídicas, deseo apelar al sentido común de los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical, porque sé muy bien que ellos sabrán evaluar la gravedad del momento que vivimos; y así como en un oscuro día de Semana Santa del año 1987 los hombres de nuestra bancada no tuvieron pruritos en pararse en los escalones de la Casa Rosada y en salir al balcón para defender las instituciones de ustedes... (*Aplausos*)..., al sentimiento patriótico de todos para que vean en qué situación estamos.

No me degrado como ser humano ni como hombre implorándoles que sepan entender la gravedad del momento que vivimos, que sepamos dejar de lado diferencias menores, que sepamos que lo que aquí se encara es un plan económico, porque lo que en realidad está en juego son los destinos del sistema político.

Por todo eso, por la gravedad del momento que estamos viviendo, más que por las razones jurídicas aludidas, le solicito a la bancada de la Unión Cívica Radical que permanezca en el recinto. (*Aplausos*.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: la bancada del Frente Grande está dispuesta a sostener la democracia y la institucionalidad, así como a hacer frente junto con todo el país a la crisis que no contribuimos a originar.

Si bien escuchamos las palabras de los señores diputados Maqueda y Calván, estamos impresionados por las que ayer pronunciara el ministro Cavallo, que con toda franqueza nos planteó lo que muchos de nosotros sabíamos, pero hoy tomamos conciencia de cómo golpea. Esto no debe ser un secreto en el universo pequeño de los dirigentes políticos, sino un problema de toda la sociedad, con las consecuencias que ello tiene.

Deseo referirme a las palabras últimas del señor diputado Maqueda, porque con él y con otros señores diputados aquí presentes compartimos la tarea de reformar la Constitución Nacional.

Hablar hoy del espíritu del legislador supone ir a leer los debates; de lo contrario estamos frente a una simple interpretación personal obviamente subjetivada por la necesidad política.

La Constitución Nacional es muy clara en cuanto a las atribuciones del Congreso se refiere. Dice así: "Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".

Esto no es caprichoso; nuestra posición la adelantamos: si no tenemos una total y absoluta garantía de la bancada justicialista en cuanto al respeto de este precepto constitucional, nosotros no vamos a participar dando el quórum. Queremos ayudar pero creemos que la única manera de salir de la crisis es por consenso, y eso fue lo que se logró en la reforma de la Constitución Nacional. Más allá de las fuertes y largas discusiones, siempre se avanzó dentro del consenso. Y en ese caso los diputados convencionales que pertenecemos a esta bancada, aun a sabiendas, como legítimamente puede hacerlo cualquier fuerza, de que podíamos llegar a ser gobierno algún día, nos autolimitábamos estableciendo este tipo de cláusulas, en aras justamente de los principios republicanos y de la democracia que tanto nos costó y nos sigue costando, por lo visto, fortalecer.

Ayer escuché expresiones bastante livianas, que espero, hayan sido dichas por la situación que se estaba viviendo alrededor de las 5 de la mañana. Por ejemplo, alguien manifestó: "Y bueno, que lo arregle la Corte Suprema". Esto supone, señores diputados, que aquella persona que se sienta vulnerada por un decreto que lo afecta en materia impositiva, debería concurrir ante el más alto tribunal, por supuesto que pagando previamente el impuesto.

Lógicamente, tendrá que esperar el tiempo que sea, porque todos sabemos —no es necesario que abunde en la cuestión— que con el tipo de justicia que tenemos demandará años la resolución de su caso.

No estamos dispuestos a tirar alegremente sobre nuestros conciudadanos semejante carga. Por eso, exigimos que se cumpla a rajatabla el precepto constitucional. Esa Constitución que juramos, respetémosla. Si no, le pediría al compañero diputado Maqueda, en quien reconozco una gran inteligencia —creo que por eso fue elegido para defender la posición de su bloque—, que consultemos los debates de la Convención Constituyente y ahí sabremos cuál era el espíritu de los legisladores que la sancionaron. En los debates puede advertirse el espíritu de la norma; de otra manera, nuestro bloque no va a permanecer aquí.

Sr. Matzkin. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con la venia de la Presidencia?

Sra. Fernández Meijide. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: la señora diputada tiene la inquietud de conocer cuál será la actitud de la bancada Justicialista; nosotros también tenemos la inquietud de saber cuál sería la actitud de su bancada con respecto al sentido del voto en relación al proyecto que estamos tratando.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Fernández Meijide. — Señor presidente: si se respeta este principio constitucional, estamos dispuestos a votar la norma en general, sin la inclusión del artículo que otorgaría la posibilidad al Poder Ejecutivo de aumentar la alícuota. Consideramos que ésa es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, que puede ser lógica ya que constituye un mecanismo fácil para incrementar la tributación. Así el IVA podría ser aumentado, por ejemplo, hasta la alícuota del 22 por ciento, con las consecuencias que ello provocaría.

Por otra parte —y ésta es una opinión personal— creo que habría gente que no lo podría pagar, por lo que no redundaría en una mayor recaudación sino en todo lo contrario. Y no porque no se lo quiera tributar o porque haya evasión. Ustedes saben muy bien, sobre todo los diputados provinciales porque lo han vivido, que hay gente que no está pagando porque entre hacerlo y comer, prefiere esto último. Esta es la realidad.

Entonces, que quede claro que, si se acepta el criterio de dejar de lado ese artículo, nosotros estamos dispuestos a votar el proyecto en general, y después debatirlo en particular, donde incluso vamos a proponer modificaciones.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: no hay nada peor que el drama constitucional, cuando se enfoca a la Constitución y sus normas como montañas de obstáculos que pueden impedir las decisiones más elementales de los gobiernos o de los poderes públicos. La Constitución es el instrumento político por excelencia y sus disposiciones nunca pueden ser enfocadas con apelaciones dramáticas, como se desprende de las palabras pronunciadas por el señor diputado por La Rioja.

Un principio de todas las Constituciones es que sus disposiciones están pensadas y escritas,

sobre todo, son interpretadas por los poderes de acuerdo con las facultades que ellas otorgan, para servir a los actos útiles que el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial realizan dentro del marco constitucional.

Estoy muy de acuerdo con las palabras que ha pronunciado el señor diputado por Córdoba. Obviamente, en 1994, el reformador de la Constitución ha querido que se respetara el sistema que significa el derecho de las provincias a los recursos coparticipables. Por ello, para asignar estos recursos en un sentido distinto específico, o para sustraer determinados recursos de esa distribución entre las provincias, se requiere una mayoría especial. Una vez establecida una asignación específica de los recursos que integran la masa de coparticipación, tampoco podría asignárseles otro destino o modificarse el dado, sin contar también con una mayoría especial.

Aquí no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. No estamos afectando ningún bien, ningún recurso coparticipable, a un destino específico de esa distribución o reparto.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Durañona y Vedia.—Tampoco estamos modificando el destino específico dado por una ley anterior a recursos que otrora pudieron haber sido coparticipables. Esto lo ha explicado muy bien el señor diputado por Córdoba y creo que en ello le asiste razón. Por consiguiente, sería de una interpretación muy forzada o vanamente estricta limitar los poderes del Congreso donde la Constitución no lo hace.

Otra cuestión que se ha planteado es el tema de la delegación. También he oído expresiones dramáticas con motivo de todo esto, apelaciones a las facultades extraordinarias y a la suma del poder público, remembranzas de gobiernos del siglo pasado, calificaciones de infames traidores a la patria y esta invocación dramática de la Constitución, tan perjudicial cuando se trata de los actos útiles y corrientes de los poderes públicos en el ejercicio de su gobierno.

Joaquín V. González decía que estas apelaciones dramáticas y estos escenarios de representación teatral son cuestiones inconvenientes cuando se deben tratar asuntos de interés público.

No existe tal impedimento a la delegación, porque lo dice expresamente el texto constitucional. Se puede hacer en materias determina-

das de administración o de emergencia pública con un plazo fijado para su ejercicio. Es el caso que tratamos hoy, que está dentro de las bases de la delegación que el Congreso establece. Cuando la Constitución habla de la delegación deja bien en claro que hace referencia a cada acto concreto en que ésta se realiza, que está en el contenido propio de la ley. No habla de una legislación general en materia de delegaciones.

Quiero encontrar una solución para estas cuestiones, porque del modo en que se están tratando da la sensación de que en esta Cámara hay personas que no desean atender ni están dispuestas a escuchar opiniones que las contraríen. Comprendo que en algún momento dado pueda existir una necesidad política de expresión que se traduzca en ausencia. Comprendo que alguna vez se haya buscado en este recinto una repercusión externa de lo que aquí sucede, con la obstrucción del quórum. Pero esto no puede convertirse en un continuo ingreso y egreso de diputados del recinto como un modo permanente de actividad parlamentaria, porque de esa forma se estaría afectando directamente el funcionamiento de la institución.

Sé que el señor diputado por La Rioja tiene un profundo respeto por las opiniones de un antecesor suyo que ocupó una banca en el Senado de la Nación. Por lo tanto, amistosamente le recomiendo que lea las palabras pronunciadas por ese ilustre riojano en 1922, en oportunidad en la que se hablaba de las dificultades que creaba la obstrucción para el funcionamiento del Congreso. Fue precisamente entonces cuando Joaquín V. González vaticinó la decrepitud institucional en que terminaría la República pocos años más tarde, de lo que tuvimos que lamentarnos por varias décadas.

Todos tienen derecho a manifestar sus interpretaciones. Me parece muy fundada y correcta la interpretación del señor diputado Galván aunque no la comparto. Pero no me parece correcto que el señor diputado Galván y su bloque se erijan en los jueces supremos y últimos de la interpretación de la Constitución, que cabe sólo a esta Cámara como cuerpo. Miles de veces el Congreso ha tenido que interpretar la Carta Magna y a veces ha variado esa interpretación.

Recuerdo cuando el ex diputado Vanossi, con la elocuencia, la solvencia y el conocimiento que lo caracterizan —y que ahora extrañamos en esta Cámara— fundaba su apoyo al decreto de estado de sitio que se habíado dictado.

Pero también encontramos a la Unión Cívica Radical efectuando interpretaciones distintas en otras etapas de la historia y de la vida institucional. ¿Cómo se resuelve este tema? Las circunstancias y opiniones encontradas se resuelven con la interpretación que cabe al cuerpo. Siempre que hubo que decidir sobre una cuestión de este tipo se consultó, como es regla de la democracia, la interpretación ratificada por el voto de la mayoría de la Cámara.

Sr. Galván. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Durañona y Vedia. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: lamento interrumpir al señor diputado por Buenos Aires pero, como me ha invitado a inspirarme en Joaquín V. González, quiero decirle que conozco a mi comprovinciano a partir de su libro *Mis montañas*. He recorrido la trayectoria literaria de Joaquín V. González hasta su última expresión a favor de la esperanza argentina, contenido en una magnífica lección de optimismo introducida en una conferencia que pronunciara en la Universidad de La Plata.

Simplemente quiero leer un párrafo de su obra *Manual de Derecho Constitucional*: "Solo el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede establecer impuestos y legislar sobre las cosas que los producen y sobre contribuciones directas". Ello figura en la página 431.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: me parece excelente el párrafo que ha leído el señor diputado. Enriquece esta discusión, pero no comprendo realmente la vinculación que pueda existir con lo que estamos haciendo. En esta norma no existe ninguna delegación de facultades legislativas sino simplemente de la materia determinada de administración a que se refiere el artículo 76, dentro de las circunstancias que la misma Constitución trata.

Hay suficientes precedentes en el Congreso argentino en el sentido de que, cada vez que se ha resuelto una interpretación constitucional con motivo de una legislación, se han utilizado los fundamentos de la opinión de la mayoría del cuerpo, que es la que interpreta. No cabe considerar, en este sentido, a bloques o grupos po-

líticos de la Cámara. Por consiguiente, creo que una moderación esencial en la vida republicana llevará a aceptar que el caso de duda que aquí se ha planteado debe ser resuelto sin imposiciones, sin amenazas y sin castigos por la voluntad soberana de este cuerpo.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia informa a los señores diputados que la lista de oradores está integrada por los señores diputados Natale, Berhongaray, Jesús Rodríguez, Fernández Gill, Pellín, González Gaviola, Cristina Guzmán, Negri y Abihaggle.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: desco participar en la discusión constitucional que se ha traído a este debate, aunque deberíamos estar abocados a la consideración de los alcances del proyecto de ley en sus matices de fondo. En este último sentido, debería definirse con precisión cuánto podría producir esta norma en materia de recaudación para empezar a equilibrar las cuentas del Tesoro nacional.

Hemos venido señalando el desbalance de dichas cuentas desde hace varios meses, y anoche quedó en evidencia con la presencia del ministro de Economía. Incluso, en caso de que prospere, quiero formular algunos reparos al texto del proyecto de ley, a fin de que luego no surjan dudas interpretativas. Tal es el caso del concepto de capital con respecto a las empresas unipersonales, para que se entienda por tal el patrimonio neto de ellas y no su activo fijo, como en una lectura fiscalista de la disposición podría llegarse a hacer, a pesar de que la correcta interpretación sería otra y de que anoche el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos señaló también que la interpretación correcta era la del activo menos el pasivo. Pero el bloque radical no planteó esto y a ello me quiero referir.

El señor diputado Galván ha señalado que el artículo 75, inciso 3º, de la Constitución Nacional exige el voto de una mayoría calificada —la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo— para la sanción de determinadas leyes impositivas que crean asignaciones específicas. Su opinión no es la correcta. La buena tesis constitucional es la que ha sostenido el señor diputado Maqueda. No formulo esta consideración con especulaciones políticas de ninguna naturaleza porque incluso tenemos serios reparos al tema de fondo, que es el impuesto a los bienes personales que estamos tratando. Pero para ser leales con la Constitución que nosotros mismos juramos aunque contuviese mu-

chas disposiciones que no nos gustaban, creo que debemos interpretarla tal cual fue escrita. Esas asignaciones específicas a las que se refiere el artículo 75, inciso 3º, de la Constitución son aquellas que se dan a determinadas provincias sustrayéndolas de la masa de coparticipación de la cual son beneficiarias las demás.

Por esa razón, porque estas asignaciones específicas crean un privilegio a favor de determinadas provincias y en perjuicio de todas las demás, la Constitución quiso que fuesen aprobadas por una mayoría calificada. Esto que digo ahora lo escribí con anterioridad y lo voy a leer, con la dispensa de la Cámara, para que nadie tenga dudas de que mi opinión no es circunstancial sino que fue producida antes de que se llevase a cabo este debate.

Hace algunos días se ha publicado un libro mío donde analizo la reforma constitucional de 1994. En la parte pertinente digo lo siguiente: "El inciso 3 contempla la existencia de asignaciones específicas de recursos coparticipables, es decir, lo que en la práctica presupuestaria se administra como contribuciones que especialmente se otorgan a determinadas provincias. Esto se detrae de la masa coparticipable en beneficio de aquellas que tengan mayor capacidad de presión política y conoiguientemente en perjuicio de las que no la tengan. Como salvaguarda se requiere que estas asignaciones sean dispuestas por la ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".

Esta es la interpretación que hice antes de que se produjese este debate y estoy seguro de que es la única que cabe, pues fue la que motivó a incluir esta disposición en la Convención de Santa Fe. Algunas provincias defendían las asignaciones específicas que tenían, otras aspiraban a tenerlas y, como una solución a este tema tan irritante de las asignaciones específicas que se hacen a ciertas provincias en perjuicio de otras, se estipuló que ellas debían ser aprobadas por una ley que contase con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Ninguna otra asignación específica, como se intenta atribuir tal carácter a la que discutimos en virtud del proyecto de ley impositiva que nos convoca, tiene esta exigencia de voto especial.

Por lo expuesto, más allá de las observaciones que formularemos a la iniciativa que estamos debatiendo, dejo señalada nuestra posición contundente en el sentido de que el proyecto de ley en consideración requiere para su aproba-

ción solamente el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que se encuentren presentes en el momento de su sanción.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Señor presidente: a fin de aportar un elemento más a este debate, creo que sería bueno remontarnos un poco a lo que durante el transcurso de la Convención Constituyente de 1994 se señaló reiteradamente como las ideas-fuerzas que la animaron, cuales eran las de consenso y descentralización: consenso que se plasmó en el texto que todos los constituyentes votamos, y descentralización que se daba de dos maneras. Primeramente, descentralización en los poderes y, en segundo término, descentralización en las relaciones entre la Nación y las provincias.

Se buscó la descentralización de los poderes mediante un sistema menos presidencialista, con mayor protagonismo y participación del Parlamento y una independencia más acentuada del Poder Judicial, con órganos de control externo y ministerio público actuando en forma autónoma.

A través de la descentralización entre la Nación y las provincias intentamos reivindicar un federalismo que había nacido en la letra de la Constitución del 53 pero que lamentablemente se había deformado con el devenir histórico. Precisamente, una de las comisiones que trabajó en la Convención fue la de Afirmación del Federalismo, presidida por el gobernador de mi provincia. En todas sus sesiones y después en las reuniones plenarias se palpó un auténtico sentido federal que trataba de reivindicar aquello que había sido un objetivo no logrado de nuestros constituyentes del 53.

Tan influyente era ese espíritu de descentralización y de federalismo que varios constituyentes sin distinción de partidos —porque éste no era un problema de partidos sino en todo caso de provincias— plantearon el tema de la eliminación de las asignaciones específicas. Se estableció así que el concepto de coparticipación debía ser la regla general y que en lo posible había que eliminar las situaciones excepcionales. En estas discusiones estaba presente la cuestión del Fondo para el Desarrollo del Conurbano Bonaerense, que enfrentaba la oposición de muchas provincias —yo diría de la mayoría—, pero que finalmente se logró mantener en forma transitoria por una situación de compromiso.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: ¿tendría inconvenientes en proseguir su exposición la semana que viene?

Sr. Berhongaray. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Muchas gracias, señor diputado.

En vista de que lamentablemente no se ha arribado a un acuerdo político para avanzar en el tratamiento del proyecto en consideración,

en uso de las atribuciones que confiere a esta Presidencia el artículo 157 del reglamento, invito a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15 horas.

—Es la hora 16 y 51.

FULVIO F. RAMOS.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.